

# Capítulo 11

---

## **Medición de costos sociales o invisibles de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México: implicaciones para el diseño de políticas públicas efectivas.**

*Ma. del Carmen Alcalá Álvarez<sup>1</sup>  
Alejandra Leonor Salado Iñiguez<sup>2</sup>  
Virginia Guadalupe López Torres<sup>3</sup>*

<https://doi.org/10.61728/AE24004091>



---

<sup>1</sup> Doctora en Ciencias Sociales. Profesora-investigadora, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México, [alcala@uabc.edu.mx](mailto:alcala@uabc.edu.mx), <https://orcid.org/0000-0002-2646-3666>

<sup>2</sup> Doctora en Estudios Sociales (Procesos políticos). Profesora-Investigadora, Facultad de Economía y Relaciones Internacionales, Universidad Autónoma de Baja California, Tijuana, México, [leonor.salado@uabc.edu.mx](mailto:leonor.salado@uabc.edu.mx) <https://orcid.org/0000-0001-7212-6145>

<sup>3</sup> Doctora en Ciencias Administrativas, Profesora-investigadora, Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, Universidad Autónoma de Baja California, Ensenada, México, [virginia.lopez@uabc.edu.mx](mailto:virginia.lopez@uabc.edu.mx), <https://orcid.org/0000-0002-2795-8951>

## **Resumen**

Este trabajo presenta los resultados de una investigación y revisión bibliográfica sobre las metodologías utilizadas para medir costos económicos y sociales, con el objetivo de identificar su aplicabilidad al estudio de la violencia contra niñas, niños y adolescentes en México. Se analizan enfoques como el análisis de costo-efectividad y el análisis de costo-beneficio, así como otros métodos relevantes, incluidos el análisis de costos indirectos y la evaluación del impacto social. Esta tarea es fundamental para el diseño de políticas públicas, ya que permite a los responsables de la toma de decisiones comprender los impactos económicos y sociales de la violencia, priorizar intervenciones y proporcionar un marco para evaluar los resultados de dichas políticas.

## **Introducción**

La violencia contra niños, niñas y adolescentes es un problema grave que afecta no solo su salud física, sino también su bienestar emocional y social. Según la Organización Mundial de la Salud (2016), “la violencia en la infancia y la adolescencia puede tener efectos a largo plazo en el desarrollo físico, psicológico y emocional de los jóvenes” (p. 12). Este impacto se traduce en un aumento de problemas de salud mental, como la depresión y la ansiedad, que pueden persistir hasta y durante la edad adulta. La seguridad es otro aspecto que se ve afectado por la violencia. En entornos donde las niñas, los niños y adolescentes son víctimas de violencia, ya sea en el hogar, en la escuela o en la comunidad, su sentido de seguridad se ve colapsado. El Banco Mundial (2018) afirma que “la inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los jóvenes, sino que también obstaculiza su capacidad para aprender y desarrollarse plenamente” (p. 45). La falta de un ambiente seguro puede llevar a la deserción escolar y a una mayor vulnerabilidad frente a conductas de riesgo, perpetuando un ciclo de violencia y pobreza.

La violencia en la infancia y en la adolescencia se estudia desde diversas disciplinas y enfoques multidisciplinarios, como la psicología, la sociología, la antropología, la educación, el derecho, la salud pública, el trabajo social, la criminología y la neurociencia, entre otras. Sin embargo, a pesar de la relevancia del tema para disciplinas como la economía y la política, son escasos los esfuerzos investigativos que integran estos dos enfoques cuya complementariedad permite sin duda coadyuvar a formular propuestas de políticas públicas efectivas.

Por la relevancia que reviste el tema, este trabajo tiene como propósito establecer elementos de complementariedad entre la economía y la política, con el fin de abordar de manera integral los problemas asociados con la violencia contra niños, niñas y adolescentes. En este contexto, resulta esencial identificar y cuantificar los costos económicos y sociales implícitos en estas situaciones, que suelen estar invisibilizados en las estadísticas convencionales. Así, se busca resaltar la importancia de asignar un valor económico a aquellos costos no contabilizados o invisibles que, aunque no se reflejan directamente en las cuentas oficiales, afectan profundamente el bienestar y desarrollo de las familias de las víctimas.

Asimismo, es crucial revisar los conceptos utilizados para referirse a los costos invisibles, así como el análisis a los métodos propuestos para su medición, para su utilización futura en el estudio de costos de la violencia. La identificación de estos costos no solo contribuirá a una valoración más justa y precisa de los impactos sociales de la violencia, sino que también permitirá diseñar estrategias más efectivas para mitigar sus efectos a largo plazo en las generaciones futuras. La atención en los costos invisibles proporcionará una base sólida para la creación de políticas públicas orientadas a la prevención y atención de estos problemas.

### **Complementariedad entre economía y política en el estudio de la violencia**

La complementariedad entre la economía y la política es fundamental para abordar la complejidad de las violencias, ya que ambas disciplinas ofrecen perspectivas interrelacionadas que permiten una visión más integral de este fenómeno. La economía se enfoca en los costos y las consecuencias

materiales directas de la violencia, mientras que la política analiza las relaciones de poder, las estructuras de la gobernanza y los factores sociales que facilitan o perpetúan tales actos. Así, la política contribuye con un análisis sobre las dinámicas de autoridad, legalidad e impunidad, mientras que la economía se concentra en las repercusiones materiales, como la afectación de la productividad y la inversión.

No obstante, la medición de la violencia debe trascender sus efectos inmediatos y tangibles, tales como los daños a la infraestructura o las muertes directas, pues es esencial incorporar aquellos aspectos menos visibles o “ocultos” que subyacen en el sistema. Las externalidades negativas derivadas de la violencia, como la erosión de la confianza social, la disminución en la inversión y el deterioro del tejido social, generan efectos multiplicadores que superan ampliamente los costos directos de enfrentamientos y actos delictivos. Aunque estos costos resultan difíciles de cuantificar, su impacto en las economías locales y nacionales es profundo, distorsionando el desarrollo y exacerbando las desigualdades sociales. El concepto de externalidades negativas, ampliamente reconocido en la teoría económica, permite identificar estos efectos no evidentes que, si bien no se reflejan de forma inmediata en el Producto Interno Bruto (PIB), repercuten de manera significativa en la calidad de vida y limitan las oportunidades de crecimiento a largo plazo.

En este contexto, la política ofrece herramientas esenciales para comprender cómo las políticas públicas, las estructuras de poder y las relaciones de clase inciden en la prevalencia y perpetuación de la violencia. Glaeser et al. (2007) argumentan que las instituciones políticas desempeñan un rol crucial en mitigar o exacerbar los efectos de la violencia, dado que la debilidad de los sistemas de justicia, la corrupción o la falta de representación política pueden sostener ciclos de violencia. La política de seguridad, la aplicación de la ley y la cohesión social son elementos fundamentales, no sólo para prevenir la violencia, sino también para entender la distribución de sus costos en el seno de una sociedad. Desde una perspectiva económica, estos factores inciden en el nivel de incertidumbre y riesgo en los mercados, lo cual influye en decisiones de inversión, empleo y estabilidad económica. La integración de estas dos aproximaciones permite un análisis profundo de las causas estructurales de la violencia y de las dinámicas

sociales que suelen quedar fuera del alcance de los estudios económicos convencionales.

Desde la economía, la violencia puede verse como un fenómeno que genera distorsiones en los mercados, creando externalidades que afectan tanto al bienestar individual como colectivo. Fajnzylber et al. (2002) argumentan que la violencia no solo tiene un costo directo en términos de vidas humanas y propiedad destruida, sino que también genera efectos a largo plazo sobre el crecimiento económico, como la desincentivación de la inversión, la fuga de capital humano y la reducción de la movilidad social. Además, como lo subraya Dube y Vargas (2013), la violencia tiene efectos en la educación y en el capital humano, ya que las familias afectadas por altos niveles de inseguridad suelen ser más reacias a enviar a sus hijos a la escuela, lo que perpetúa los ciclos de pobreza y exclusión.

Por otro lado, la violencia implica un costo social difícil de cuantificar, aunque profundamente relevante para la cohesión social y el bienestar colectivo. Desde la ciencia política, se ofrece una comprensión detallada de cómo las desigualdades de poder y las inequidades sociales contribuyen a la manifestación de la violencia. En entornos de alta desigualdad, por ejemplo, las luchas por el acceso a recursos tienden a intensificar las tensiones sociales y a detonar conflictos violentos. Este análisis de las desigualdades sociales se complementa con la perspectiva económica, que observa los efectos de la violencia en la pobreza y en la distribución del ingreso. Murphy et al. (2019) señalan que la violencia promueve la creación de “economías paralelas” o informales, donde las actividades ilícitas se convierten en un recurso de subsistencia para quienes se ven afectados por la violencia, perpetuando un ciclo de marginación y pobreza. Este fenómeno repercute no solo en los individuos implicados, sino en el sistema económico en su conjunto, dificultando la generación de empleo formal y comprometiendo la estabilidad macroeconómica.

A la luz de estas complejidades, surge la necesidad de abordar la medición de la violencia desde perspectivas específicas y diferenciadas, como es el caso de la violencia que afecta a niñas, niños y adolescentes, para quienes las consecuencias pueden ser aún más profundas y de largo alcance.

### **¿Por qué cuantificar las violencias en niñas, niños y adolescentes?**

El estudio de las violencias en la infancia y la adolescencia es crucial tanto desde la economía como desde la política, ya que estos períodos de la vida son especialmente vulnerables a los efectos devastadores de la violencia, cuyas repercusiones a menudo se extienden a lo largo de toda la vida. La economía, al centrarse en la medición de los costos directos e indirectos, puede ayudar a visibilizar los impactos invisibles de la violencia, como la pérdida de potencial productivo, la disminución de la movilidad social y la perpetuación de ciclos de pobreza. Sin embargo, estos costos son a menudo difíciles de cuantificar, ya que incluyen factores como el trauma psicológico, el bajo rendimiento académico, la exclusión social y el desgaste emocional que afectan a los niños y adolescentes expuestos a ambientes violentos.

Desde la perspectiva de la política, es fundamental analizar cómo las políticas públicas, la estructura de poder y la falta de protección institucional perpetúan estas formas de violencia. Además, la medición de estos impactos ocultos debe ir más allá de las estadísticas convencionales, incorporando enfoques cualitativos y metodologías que evalúen el daño a nivel individual y colectivo, como los estudios de caso longitudinales, las entrevistas en profundidad y los indicadores de bienestar social. Las políticas públicas deben tomar en cuenta estos “números invisibles” para diseñar intervenciones más efectivas, como programas de apoyo psicológico, mejora en la educación, y políticas de prevención de la violencia que no solo busquen mitigar los efectos inmediatos, sino también reducir las causas estructurales que perpetúan la violencia en las generaciones más jóvenes. Integrar las perspectivas de la economía y las ciencias políticas en este contexto puede generar un enfoque más holístico y multidimensional para abordar los efectos a largo plazo de la violencia en la infancia y la adolescencia, con un impacto directo en la construcción de políticas públicas que promuevan una sociedad más equitativa y resiliente.

Los pronunciamientos de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) refuerzan la necesidad de medir y abordar estos costos ocul-

tos de la violencia. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible establece que “es imperativo abordar la violencia en todas sus formas para lograr un desarrollo sostenible y equitativo” (ONU, 2015, p. 19). La recolección de datos precisos sobre la violencia contra niñas, niños y adolescentes es vital para que los gobiernos y las organizaciones no gubernamentales puedan desarrollar estrategias efectivas que garanticen la salud, el bienestar y la seguridad de esta población. Así, se podrán diseñar intervenciones que no sólo aborden las consecuencias inmediatas, sino que también prevengan futuros ciclos de violencia y contribuyan al desarrollo social.

Cuantificar los costos económicos y sociales es fundamental para comprender el impacto integral de problemas como la violencia, la inseguridad y las deficiencias en el sistema de salud en México. Los costos sociales abarcan los efectos indirectos de una acción que no se refleja en su costo inicial. Estos incluyen impactos no contabilizados en salud pública, bienestar social y cohesión comunitaria, que generan consecuencias significativas para la sociedad en su conjunto. Esta subestimación puede llevar a una comprensión incompleta de los problemas, lo que dificulta la formulación de políticas efectivas. La violencia, por ejemplo, tiene costos que incluyen no solo gastos médicos y legales, sino también pérdidas en productividad escolar y deterioro de la salud mental. Según la OMS (2014), “la violencia es un problema de salud pública que tiene consecuencias a largo plazo en el bienestar de las personas”. Al cuantificar estos costos, se pueden diseñar intervenciones más efectivas que aborden tanto las causas como las consecuencias de la violencia en la sociedad.

Desde el ámbito de la salud, medir los costos sociales permite entender cómo la violencia afecta el bienestar físico y mental de las víctimas. Un estudio del Instituto Nacional de Salud Pública (2016) señala que “los efectos de la violencia se extienden más allá de las lesiones físicas, impactando la salud mental y la calidad de vida de los afectados”. Al considerar los costos indirectos, como la disminución de la calidad de vida y el impacto en la productividad escolar, se evidencia la necesidad de adoptar un enfoque más amplio en las políticas de salud pública. Esto no solo contribuye a mejorar la atención a las víctimas, sino que también fortalece la prevención y promoción de la salud.

La seguridad es otro ámbito crítico donde la medición de costos so-

ciales juega un papel vital. La violencia y la inseguridad pueden afectar el desarrollo económico de las comunidades y el bienestar de sus habitantes. Como señala el Banco Mundial (2018), “la violencia no solo causa pérdidas humanas, sino que también desincentiva la inversión y limita las oportunidades de desarrollo”. Al cuantificar estos costos, se puede justificar la asignación de recursos a programas de seguridad pública y prevención del delito, esenciales para mejorar la calidad de vida de la población. En México, la violencia ha sido un tema creciente en la agenda pública, y la falta de datos precisos ha dificultado la implementación de políticas efectivas.

La medición de los costos económicos y sociales en temas de violencia, salud y seguridad es esencial para abordar estos problemas de manera integral. Los pronunciamientos de organismos internacionales refuerzan esta necesidad, instando a los países a adoptar enfoques basados en evidencia para la formulación de políticas. Estudios recientes en México, como el de la Secretaría de Salud (2020), destacan la urgencia de contar con herramientas de medición que reflejen el impacto real de la violencia. Al comprender la magnitud de los costos asociados con estos problemas, se pueden priorizar intervenciones que no sólo aborden las consecuencias inmediatas, sino que también contribuyan al desarrollo sostenible y al bienestar de la sociedad en su conjunto.

### **Costos asociados a la violencia: una revisión conceptual**

Esta revisión examina las diversas categorías de costos asociadas a la violencia, considerando tanto los costos económicos como los sociales. Se profundiza en la relevancia de estos conceptos para comprender el impacto de la violencia en individuos y comunidades, y se explora su aplicación en investigaciones académicas y en la formulación de políticas públicas. El propósito es establecer un marco conceptual que facilite la evaluación y comparación de los costos en los estudios sobre violencia, contribuyendo así a una comprensión más integral y precisa del fenómeno y de sus consecuencias a nivel social y económico.

En economía, el concepto de costo es esencial para comprender cómo las decisiones influyen en la sociedad en su conjunto. El costo se define como el valor de los recursos sacrificados para llevar a cabo una actividad

económica. Como señala Mankiw (2014, p. 4), “el costo de algo es lo que se renuncia para obtenerlo”. Existen diversas categorías de costos, entre las cuales destacan los costos sociales, entendidos como la suma de los costos privados y los costos externos generados por las actividades económicas. Pigou (1920, p. 11) afirma que “los costos sociales deben incluir los efectos negativos de la producción y el consumo que no se reflejan en los precios de mercado”. Esto subraya la importancia de considerar, para una evaluación adecuada de proyectos y políticas, no solo los costos que enfrenta el productor, sino también aquellos que impactan a la sociedad en general.

Los costos económicos de la violencia incluyen tanto costos directos como indirectos que impactan a las víctimas, a los sistemas de salud y a la economía en su conjunto. Los costos directos son aquellos que pueden atribuirse de manera inmediata y cuantificable a un evento violento. La Organización Mundial de la Salud (2016) señala que “los costos directos incluyen gastos en atención médica, daños materiales y pérdida de productividad laboral debido a lesiones” (p. 12). Según Miller et al. (1996), “los costos directos son aquellos que se pueden calcular de manera clara y directa, como las facturas médicas y los costos de reparación” (p. 24). Esta clasificación permite a los investigadores y responsables de políticas evaluar el impacto económico inmediato de la violencia.

Además, estos costos representan una carga significativa para los sistemas de salud pública y pueden afectar el desarrollo económico de un país, ya que los recursos que podrían destinarse a inversiones productivas se desvían para atender las consecuencias de la violencia. Esta situación no solo agrava la crisis económica, sino que también limita las oportunidades de crecimiento y bienestar en las comunidades afectadas.

Por otro lado, los costos indirectos son más difíciles de cuantificar y se refieren a los efectos económicos secundarios que la violencia genera en la sociedad. Esto puede incluir la pérdida de productividad laboral debido a la incapacidad temporal de las víctimas o el sufrimiento emocional que afecta la calidad de vida. Como señala Cohen (2000), “los costos indirectos abarcan las consecuencias no visibles que afectan a las víctimas y a la comunidad en su conjunto, incluyendo el impacto en el bienestar psicológico y el rendimiento educativo” (p. 87). Estos costos son cruciales para

obtener una visión más completa del impacto de la violencia.

La distinción entre costos directos e indirectos es fundamental para la formulación de políticas efectivas. Los costos directos pueden ser utilizados para justificar inversiones en servicios de salud y programas de intervención, mientras que los costos indirectos resaltan la necesidad de enfoques integrales que aborden las causas subyacentes de la violencia. Según un informe de la Organización Mundial de la Salud (2014b), “una comprensión adecuada de ambos tipos de costos es esencial para el desarrollo de estrategias de prevención y respuesta a la violencia” (p. 32).

La evaluación de estos costos no solo proporciona un marco para entender el impacto económico de la violencia, sino que también apoya la argumentación para la asignación de recursos y la implementación de programas. Como enfatiza Miller (2007), “comprender la carga económica de la violencia a través de la identificación de costos directos e indirectos es esencial para crear una base sólida para la acción política” (p. 109). Así, el análisis de costos se convierte en una herramienta valiosa para la promoción de cambios significativos en las políticas públicas.

En otras clasificaciones de costos, se incluyen los costos ocultos o invisibles, que son un tipo de costo social que no se refleja explícitamente en los balances financieros. Estos costos pueden abarcar, por ejemplo, el aumento de la violencia juvenil o la mayor probabilidad de involucramiento en actividades delictivas entre los adolescentes que han sido víctimas de violencia, así como el impacto negativo en sus relaciones interpersonales y su integración en la comunidad. Como señala Stiglitz (2000, p. 65), “los costos ocultos pueden llevar a decisiones subóptimas, ya que los agentes económicos no toman en cuenta todas las consecuencias de sus acciones”. Este fenómeno es especialmente relevante en el análisis de las externalidades, donde las decisiones de un agente pueden generar repercusiones significativas en otros sin que estos últimos reciban compensación alguna.

Respecto a los costos sociales, estos representan el total de los costos derivados de una actividad económica, abarcando tanto los costos privados, que son aquellos asumidos directamente por los individuos o empresas involucradas, como los costos externos, que son los efectos no compensados que esa actividad genera sobre la sociedad y el entorno. En el caso de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, los costos so-

ciales van más allá de los efectos inmediatos y visibles sobre las víctimas directas, como las lesiones físicas o el trauma psicológico. Tal como señala Pigou (1920), “los costos sociales incluyen todos los efectos de una acción sobre la comunidad, no solo aquellos que son soportados por el agente económico”, lo que implica que la violencia genera un impacto mucho más amplio que afecta a toda la sociedad, incluso a aquellos que no están directamente involucrados en el incidente violento.

Uno de los aspectos más complejos de los costos sociales de la violencia es la externalidad negativa que genera en términos de cohesión social y bienestar colectivo. Según Hawkins et al. (2000), los costos sociales de la violencia también incluyen la pérdida de capital social, que puede llevar a una disminución de la participación cívica y a un aumento de la marginalización de ciertos grupos. Esto, a su vez, crea un entorno propicio para la reproducción de la violencia en generaciones futuras, perpetuando el ciclo de exclusión y desigualdad.

Por su parte, las externalidades son efectos colaterales que resultan de una actividad económica y que afectan a terceros que no están directamente involucrados en la transacción. En el contexto de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, estas externalidades se manifiestan de manera clara en los impactos negativos sobre la salud mental y el rendimiento académico no solo de las víctimas, sino también de quienes están a su alrededor. Cuando un niño o adolescente experimenta violencia, ya sea en el hogar, la escuela o en su comunidad, el daño no se limita a la víctima directa ni al agresor; los compañeros de clase también pueden enfrentar consecuencias emocionales y psicológicas. Hanish y Guerra (2000) encontraron que los niños expuestos a la violencia, ya sea como testigos o víctimas, tienen más probabilidades de sufrir trastornos como ansiedad, depresión y dificultades de concentración, lo que repercute negativamente en su rendimiento escolar. Estos efectos, aunque no siempre son evidentes en los costos inmediatos de la violencia, se proyectan a largo plazo en términos de productividad, bienestar social y cohesión comunitaria.

En este sentido, las externalidades negativas de la violencia afectan el entorno escolar y social de manera más amplia. La violencia genera un ambiente disruptivo que no solo afecta a la víctima directa, sino que también altera la dinámica colectiva, promoviendo un clima de desconfianza

y tensiones. A medida que se deteriora el ambiente escolar, se reduce la cohesión social, lo que aumenta la probabilidad de comportamientos violentos y perpetúa un ciclo de violencia que afecta a toda la comunidad. Coase (1960, p. 1) sostiene que “las externalidades representan un fallo en el mercado que puede ser corregido a través de negociaciones entre las partes afectadas”. Aplicando esta perspectiva al contexto de la violencia infantil y adolescente, podemos entender que las externalidades generadas por el trauma emocional y social de las víctimas, junto con los efectos en sus familias y en la comunidad escolar, podrían, en teoría, ser mitigadas mediante intervenciones que involucren a las partes afectadas, como las familias, las instituciones educativas y las autoridades locales.

Sin embargo, en la práctica, la corrección de estas externalidades es compleja debido a la multiplicidad de factores involucrados: sociales, económicos y emocionales. Las negociaciones y las soluciones focalizadas entre las partes afectadas pueden ser difíciles de implementar eficazmente debido a la falta de recursos, a la fragmentación de los servicios y a la resistencia de las estructuras sociales existentes. Esto subraya la necesidad de políticas públicas que no sólo aborden los costos inmediatos de la violencia, sino que también reconozcan los efectos a largo plazo y los costos sociales derivados de las externalidades que no siempre se reflejan en los informes o estadísticas convencionales.

Por lo tanto, la violencia en la infancia y adolescencia no solo implica costos directos y visibles, sino que también genera externalidades que afectan a una red más amplia de individuos y comunidades, amplificando los impactos negativos de manera sistémica. La falta de intervención adecuada y la ausencia de una medición integral de estos efectos contribuyen a perpetuar el ciclo de violencia, afectando tanto el bienestar individual como la estabilidad social y económica de las generaciones futuras.

El análisis de costos en relación a las externalidades es crucial para el diseño de políticas públicas efectivas. Un enfoque común es el uso de impuestos pigouvianos, que buscan internalizar las externalidades al imponer un costo a las actividades que generan efectos negativos. Como argumenta Pigou (1920, p. 152), “el objetivo de este tipo de impuestos es hacer que los productores y consumidores asuman los costos sociales de sus acciones”. Esto puede incentivar comportamientos más sostenibles y

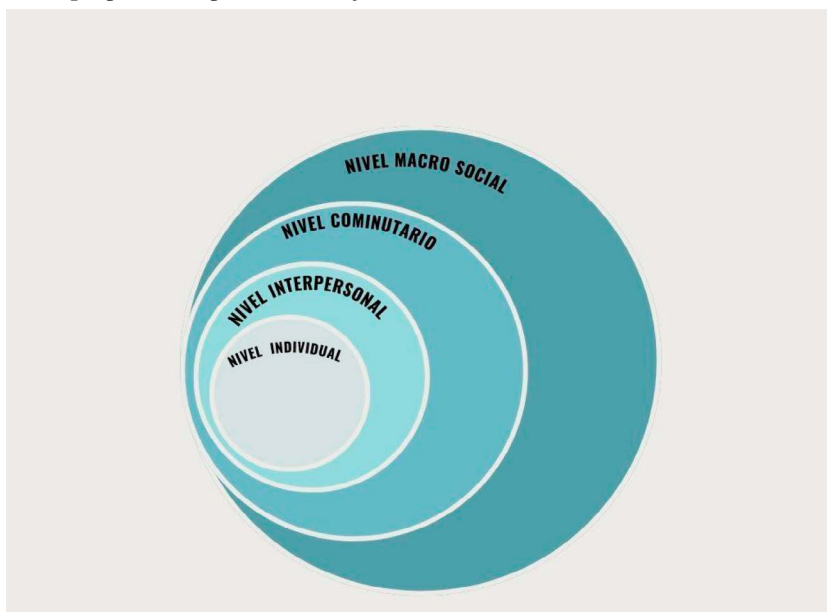
responsables, alineando así los intereses privados con el bienestar social.

Por todo lo anterior, el análisis de costos, incluyendo los costos económicos y sociales, es esencial para una comprensión integral de las externalidades en economía. Estas consideraciones son fundamentales para la formulación de políticas que busquen promover un desarrollo económico más sostenible y equitativo. Como señala Dasgupta (2001, p. 37), “una adecuada valoración de los costos es esencial para lograr un equilibrio entre el crecimiento económico y la sostenibilidad ambiental”, además del bienestar social. La incorporación de estas variables en la toma de decisiones permitirá a las sociedades avanzar hacia un futuro más justo y responsable.

### **Dimensiones de los costos ocultos de las violencias.**

Los costos ocultos de la violencia en México son múltiples y afectan a diferentes niveles de la sociedad. Para comprender la magnitud y complejidad de estos impactos, resulta de gran utilidad emplear un modelo integral que nos permita observar y analizar las diversas capas de influencia que la violencia ejerce sobre los individuos y las comunidades. Siguiendo el enfoque que se muestra en la Figura 1, se puede analizar cómo los factores individuales, interpersonales, comunitarios y macrosociales interactúan para contribuir a los altos costos que la violencia impone en términos de salud, cohesión social, productividad y bienestar general.

Figura 1.

*Modelo integral para la comprensión de los efectos de la violencia*

Fuente: Elaboración a partir del modelo de la Organización Mundial de la Salud, World Report on Violence and Health (2002).

Cada uno de estos niveles presenta desafíos específicos que se manifiestan a través de efectos tangibles e intangibles, que van desde el impacto en la salud mental y la productividad hasta el debilitamiento de los lazos comunitarios y el incremento en los costos de seguridad. Esta perspectiva proporciona un marco integral para desentrañar y abordar las dimensiones complejas y ocultas de la violencia en el país.

En el modelo integral, el nivel individual se centra en factores biológicos y experiencias personales que influyen en el comportamiento de una persona. Este nivel toma en cuenta factores como la impulsividad, el nivel educativo, el consumo de sustancias y antecedentes de agresión o maltrato, elementos personales pueden aumentar la probabilidad de que un individuo se convierta tanto víctima como perpetrador de actos violentos. Por ejemplo, si una persona con historial de agresividad, consume sustancias de manera excesiva puede estar más predispuesta a involucrarse en conductas violentas. Además, factores demográficos y biológicos, como la

edad y el género, también juegan un papel crucial en la manifestación de la violencia. Por lo tanto, la Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que es necesario tomar en cuenta los aspectos individuales para desarrollar estrategias de prevención y erradicación efectivas que aborden las raíces personales de la violencia (OMS, 2002).

Con respecto al nivel interpersonal, éste se centra en las interacciones directas que mantiene una persona con otras, como familiares, amistades y parejas íntimas. De esta manera, se considera que las dinámicas interpersonales pueden influir en que una persona sea víctima o victimaria. Por lo tanto, factores como la falta de apoyo emocional o abuso pueden aumentar significativamente el riesgo de comportamientos violentos, mientras que relaciones saludables y de apoyo pueden contener las conductas violentas. Además, es importante hacer énfasis en que el nivel interpersonal interactúa de manera bidireccional con otros niveles del modelo integral, es decir, características individuales como la impulsividad o el historial de agresión, pueden afectar la calidad de las relaciones interpersonales, al igual que el contexto comunitario y las normas sociales más amplias pueden modelar las interacciones personales (OMS, 2002).

Con respecto al nivel comunitario se refiere a los entornos sociales amplios en los que se desarrollan las interacciones interpersonales, como las escuelas, lugares de trabajo y vecindarios. La OMS explora cómo diversas características comunitarias, incluyendo la cohesión social, la densidad de población, la movilidad residencial y problemas estructurales como el desempleo y el tráfico de drogas, están asociadas con la prevalencia de la violencia. De igual manera, las variables del nivel comunitario interactúan con otros niveles del modelo, ya que las condiciones comunitarias pueden influir en las características individuales y en las relaciones interpersonales, mientras que las dinámicas a nivel individual y relacional pueden, a su vez, impactar en el bienestar y la estabilidad de la comunidad (OMS, 2002).

Por último, el nivel macrosocial incluye factores amplios que configuran el entorno social y cultural, como las normas y valores culturales, las políticas públicas, las estructuras económicas y las desigualdades sociales; estos elementos crean un clima que puede facilitar o inhibir la violencia al normalizar como medio de resolución de conflictos o al mantener políticas que perpetúan la desigualdad económica y social. El nivel macrosocial

interactúa con los niveles individual, relacional y comunitario, ya que las normas y políticas influyen en las características personales y en las dinámicas interpersonales, así como en las condiciones de las comunidades, mientras que las experiencias a nivel individual y comunitario pueden retroalimentar y modificar las estructuras macrosociales estableciendo un ciclo de influencia mutua que puede perpetuar o reducir la violencia (OMS, 2002).

La interrelación entre los diferentes niveles subraya la importancia de abordar la violencia desde una perspectiva integradora que considere tanto los determinantes estructurales como los factores inmediatos permitiendo desarrollar estrategias y políticas públicas de prevención más efectivas y sostenibles a largo plazo.

### **Los costos ocultos de las violencias en México**

Los costos ocultos de la violencia en México impactan distintos niveles de la sociedad, afectando no solo la salud mental y la productividad, sino también la cohesión comunitaria y el desarrollo económico. Para comprender la complejidad de estos efectos, es necesario emplear un modelo integral que abarque factores individuales, interpersonales, comunitarios y macrosociales. Este enfoque facilita el análisis de las diversas dimensiones a través de las cuales la violencia afecta el bienestar colectivo de manera profunda y sostenida.

### **Los impactos de la violencia en la salud mental**

La violencia en México tiene repercusiones profundas y multifacéticas que afectan las dimensiones personales, interpersonales, comunitarias y macrosociales. Por ejemplo, a nivel individual, la violencia incrementa significativamente la prevalencia de trastornos mentales, como lo señala la Secretaría de Salud de México al afirmar que “la exposición continua a situaciones violentas eleva los índices de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático entre la población” (Secretaría de Salud de México, 2018, p. 23). Estas condiciones no solo deterioran la calidad de vida de los individuos, sino que también generan una demanda creciente de

tratamientos a largo plazo, lo que representa una carga adicional para el sistema de salud pública.

Este impacto no solo deteriora la salud mental individual, sino que también afecta las relaciones interpersonales, ya que “las consecuencias psicológicas de la violencia erosionan la confianza y el apoyo mutuo entre familiares y amigos, debilitando el tejido social” (Instituto Nacional de Psiquiatría, 2020, p. 45). Además, el tratamiento de estos trastornos requiere recursos significativos, tanto financieros como humanos, que a menudo escasean en contextos de alta violencia, exacerbando aún más los costos ocultos asociados. En consecuencia, para mitigar la violencia se debe atender desde una perspectiva que incluya intervenciones en salud mental es crucial para mitigar estos costos y promover una recuperación sostenible en las comunidades afectadas.

## **Pérdida de productividad**

La violencia afecta la capacidad de las personas para trabajar, ya sea por lesiones, trauma emocional o la necesidad de ausentarse por cuestiones de seguridad. Esto reduce la productividad y afecta la economía local y nacional. La violencia en México impacta de manera significativa el desempleo y las oportunidades laborales a nivel macrosocial comunitario, interpersonal e individual. En el nivel macrosocial, la inseguridad y la violencia generalizadas crean un clima que desanima la inversión y limita el desarrollo económico; como señala Moreno y Saucedo, “la delincuencia tiene un impacto negativo en el empleo en todas las localidades, pero tiene un efecto negativo fuerte en el empleo en micro y pequeñas empresas en áreas metropolitanas y no metropolitanas” (Moreno y Saucedo, 2020, p. 10).

A nivel comunitario, la violencia es un obstáculo para el crecimiento de las empresas y la generación de empleo, ya que afecta especialmente a las comunidades más vulnerables y aumenta la precariedad laboral. En el ámbito interpersonal, el control coercitivo y la violencia dentro de las relaciones de pareja pueden restringir las oportunidades laborales de las mujeres, ya que los hombres violentos suelen limitar el acceso de sus parejas al trabajo como una forma de mantener el poder, ya que” controlar el empleo de la pareja es una táctica común en hombres con comportamientos coer-

citivos, quienes restringen la libertad de sus parejas de trabajar o realizar otras actividades fuera del hogar” (Villarreal, 2007, p. 424). Finalmente, en el nivel individual, las víctimas de violencia pueden enfrentar dificultades para conservar su empleo o encontrar nuevas oportunidades debido al trauma y las secuelas psicológicas, lo que limita su desarrollo económico y profesional a largo plazo (Orrego et al., 2020, p. 264).

## **Desplazamiento forzado**

La violencia puede obligar a las personas a abandonar sus hogares, lo que genera costos asociados con el desplazamiento, como la pérdida de propiedades y la adaptación a nuevas comunidades. El desplazamiento forzado interno en México es un fenómeno impulsado principalmente por la violencia del crimen organizado, afectando profundamente a individuos, familias y comunidades enteras. Las causas son variadas e incluyen “violencia por crimen organizado, conflictos territoriales comunitarios, y otros actos de violencia” que obligan a muchas personas a abandonar sus hogares (ACNUR, 2023, p. 3). A nivel individual, quienes sufren este tipo de desplazamiento enfrentan graves consecuencias en su salud mental y emocional, con experiencias de trauma, ansiedad y estrés generadas por la pérdida de su hogar y seguridad (Cervantes y Téllez, 2020). En el ámbito interpersonal, el desplazamiento forzado impacta las relaciones familiares y redes de apoyo, fragmentando los lazos sociales que antes sostenían a estas comunidades y provocando rupturas en el apoyo mutuo entre sus miembros (Cervantes & Téllez, 2020).

A nivel social, este desplazamiento genera vacíos poblacionales en zonas de origen y tensiones en las comunidades receptoras, las cuales suelen enfrentar una sobrecarga en sus servicios y dificultades para integrar a los desplazados, lo que afecta la cohesión social (ACNUR, 2023, p. 7). En el plano macrosocial, el desplazamiento forzado plantea grandes desafíos para el Estado, pues la falta de políticas adecuadas limita la respuesta integral ante esta problemática.

## **Impacto de la violencia en el sistema educativo**

La violencia puede afectar la asistencia y el rendimiento escolar de los jóvenes, quienes enfrentan barreras adicionales para desarrollar su potencial académico en contextos de inseguridad. Las escuelas en zonas violentas suelen tener menos recursos y mayor deserción escolar, lo que repercute en la formación y oportunidades futuras de los jóvenes, limitando sus posibilidades de movilidad social y contribución económica en el largo plazo.

La relación entre la violencia y la educación muestra impactos en múltiples niveles, desde el individual hasta el nivel macrosocial. Por ejemplo, a nivel individual, la exposición a la violencia en el entorno educativo puede generar traumas que afectan el rendimiento académico y el bienestar emocional de los estudiantes, ya que “la violencia en contextos educativos es una constante que se manifiesta en formas físicas, psicológicas y simbólicas, tanto dentro como fuera de las aulas” (Mora y Villalobos, 2019, p. 22). Este fenómeno influye en la autoestima y en la motivación de los alumnos, quienes enfrentan barreras adicionales para su desarrollo académico. En el plano interpersonal, la violencia debilita las relaciones entre estudiantes y docentes, creando un ambiente de desconfianza y hostilidad. La investigación muestra que “la violencia se ha normalizado en las escuelas, afectando tanto la interacción entre maestros y estudiantes como entre los propios alumnos” (Rodríguez et al., 2019, p. 7). La hostilidad y las dinámicas de poder afectan la cohesión del grupo y limitan la efectividad del proceso de aprendizaje.

A nivel comunitario, la violencia en los centros educativos puede perpetuar patrones de comportamiento agresivo en la sociedad. Algunos trabajos, apuntan que la educación en valores es fundamental para contrarrestar estos efectos y crear una cultura de paz, por ello, “la educación en valores debe cumplir con funciones tanto transmisoras como transformadoras, con capacidad para erradicar conductas y prevenir situaciones de violencia” (Rodrigo et al. 2019, p. 8). Y por último, en el nivel macrosocial, la violencia en contextos educativos contribuye a perpetuar ciclos de desigualdad y agresión en la sociedad en general. La UNESCO sostiene que “las escuelas libres de violencia pueden actuar como catalizadoras de la no violencia en las comunidades a las que sirven”, promoviendo así una es-

estructura social más equitativa y segura. Estos hallazgos sugieren la necesidad de políticas educativas que aborden la violencia desde una perspectiva integral, promoviendo entornos escolares seguros y equitativos que repercutan positivamente en todos los niveles de la sociedad (UNESCO, 2019).

### **Impacto de la violencia en la cohesión social y la participación política**

La violencia desgasta el tejido social y puede llevar a una disminución en la confianza comunitaria, afectando la cooperación y el desarrollo comunitario. La violencia impacta la cohesión social y la participación política en múltiples dimensiones, desde el nivel individual hasta el nivel macrosocial, alterando la estructura misma de las comunidades y su interacción con el sistema político. A nivel individual, la exposición a la violencia puede generar traumas y desconfianza, que afectan la disposición de la ciudadanía a participar en procesos políticos, ya que “la victimización reduce la confianza en las instituciones y disminuye la motivación para involucrarse en actividades políticas” (Bateson, 2012). En la dimensión interpersonal, las relaciones entre ciudadanos y autoridades se ven erosionadas, generando una desafección hacia la política y un aumento de la percepción de ineficacia del Estado (Arias y Goldstein, 2010). Esto debilita los lazos de cooperación necesarios para la cohesión social, ya que la violencia fragmenta las comunidades y promueve el aislamiento social (Moser y McIlwaine, 2004).

En el nivel comunitario, la violencia promueve la aparición de redes informales de poder, como las organizaciones criminales, que sustituyen o desafían la autoridad del Estado en la provisión de seguridad y en el control del territorio. Este fenómeno es especialmente problemático en contextos donde el Estado es percibido como débil o ausente, lo que refuerza la “autonomía política de grupos informales frente a la institucionalidad democrática” (Auyero y Mahler, 2011). Finalmente, en la dimensión macrosocial, la violencia se enraíza y genera un entorno de desconfianza y desmovilización política a gran escala, socavando el desarrollo de la cultura democrática y la participación ciudadana. Y en una sociedad fragmentada o polarizada, se dificulta la construcción de un proyecto común y la estabilidad democrática se ve comprometida al reducir la capacidad del

sistema político para integrar a la ciudadanía y responder a sus demandas.

Hasta aquí, hemos revisado sólo algunos de los costos ocultos asociados a la violencia en México, pero las repercusiones van mucho más allá de estos efectos inmediatos. Además de los impactos en la salud mental, la pérdida de productividad y el desplazamiento forzado, la violencia contribuye a la desestabilización de las estructuras económicas, la erosión de la confianza en las instituciones gubernamentales y el aumento de la desigualdad social.

Estas consecuencias adicionales no solo agravan las condiciones de vida de las poblaciones afectadas, sino que también obstaculizan el desarrollo sostenible y la cohesión social a largo plazo. Por lo tanto, es fundamental abordar la violencia desde una perspectiva integral que considere la multiplicidad de sus efectos para implementar estrategias efectivas que promuevan una recuperación plena y una sociedad más resiliente. Para ello, es indispensable contar con métodos de medición de costos sociales o invisibles que permitan cuantificar y comprender estos impactos en toda su complejidad. En el siguiente apartado, se detallarán diversas metodologías diseñadas para identificar y evaluar estos costos ocultos, proporcionando una base sólida para el diseño de políticas informadas y de amplio alcance.

## **Métodos de medición de costos sociales o invisibles**

Existen diversas metodologías que buscan proporcionar un marco para valorar los costos sociales o invisibles, cada una con sus propios enfoques y herramientas. A continuación, se presenta un análisis detallado de algunos métodos comunes utilizados para medir los costos sociales: el método de costos evitados, el método de valoración contingente, el método de costos de oportunidad, el análisis de costos y beneficios (ACB), el Análisis de Costo-Efectividad (ACE), y los estudios sobre costos indirectos e impacto social. En este análisis, se describen el tipo de enfoque utilizado, la fórmula de medición empleada, los criterios considerados para la evaluación.

El método de costos evitados es una herramienta utilizada para calcular los costos sociales asociados a fenómenos o problemas sociales, estima los gastos que habrían sido evitados si dicho fenómeno no hubiera tenido

lugar. Según Weisbrod (1961), esta metodología se basa en la idea de que los recursos destinados a abordar las consecuencias de un problema social representan los costos que se podrían haber ahorrado si dicho problema no hubiera existido. En el caso de la violencia, los costos evitados podrían estar incluyendo los gastos en atención médica, servicios de emergencia, rehabilitación, así como los costos derivados de la pérdida de productividad laboral debido a las secuelas de las víctimas. El enfoque tiene la ventaja de centrarse en la cuantificación de los recursos que se deben destinar a mitigar los efectos del fenómeno social, permitiendo así una valoración del impacto económico de este tipo de problemas.

Para aplicar el método de costos evitados a fenómenos, se utiliza la fórmula básica:

$$C=\sum(G_i\times P_i)$$

Donde C representa el costo total evitado,  $G_i$  son los gastos o recursos que se habrían destinado a tratar las consecuencias de la situación en cuestión, y  $P_i$  es la probabilidad de que dichos recursos no se hayan tenido que utilizar si no hubiese ocurrido el fenómeno. La clave en este método es identificar todos los recursos potenciales que se habrían utilizado en la prevención o tratamiento y calcular su ahorro potencial. Esto permite a los responsables de la formulación de políticas públicas comprender la magnitud de los recursos que podrían haberse ahorrado si no existiera el problema, lo que puede ayudar a priorizar intervenciones preventivas.

Numerosos estudios empíricos han utilizado este enfoque para evaluar los costos sociales de la violencia. Por ejemplo, Dube et al. (2008) aplicaron el método de costos evitados para medir los impactos económicos de la violencia doméstica en los Estados Unidos, encontrando que los costos asociados con la atención médica y la pérdida de productividad laboral superan con creces los costos de las intervenciones preventivas. En un contexto latinoamericano, López et al. (2015) calcularon los costos evitados en Colombia, enfocándose en la violencia juvenil. Los autores concluyeron que una mayor inversión en programas de prevención podría generar ahorros significativos al reducir la necesidad de recursos destinados a la atención de las víctimas y la rehabilitación de los agresores.

A pesar de su utilidad, el método de costos evitados presenta algunas limitaciones. Una de las críticas más comunes es que, al centrarse en los costos directos que se evitarían, no siempre captura de manera adecuada los costos intangibles o indirectos, como el sufrimiento emocional de las víctimas o los impactos a largo plazo en el bienestar social. Chalfin et al. (2019) argumentan que los costos evitados subestiman el verdadero impacto de la violencia, al no considerar las pérdidas en la calidad de vida y el daño psicológico que pueden perdurar por años. Sin embargo, cuando se combina con otros enfoques como el análisis de costo-beneficio, el método de costos evitados puede proporcionar una visión más completa de los costos sociales asociados con fenómenos complejos como la violencia.

El método de valoración contingente (MVC) es una técnica ampliamente utilizada en la evaluación económica de fenómenos sociales, como la violencia, para estimar el valor de los costos sociales asociados a estos problemas mediante la disposición a pagar (DAP) de los individuos. Este método se basa en encuestas en las que se pregunta a los participantes cuánto estarían dispuestos a pagar por reducir los efectos negativos de un problema, o cuánto aceptarían por vivir en un entorno más seguro. Según Hanemann (1984), el MVC se fundamenta en la teoría del bienestar económico, que sostiene que las personas están dispuestas a pagar una cantidad de dinero equivalente al valor que asignan a evitar los impactos de un fenómeno social. De esta forma, la disposición a pagar se convierte en un indicador del valor que los individuos otorgan a las mejoras en su bienestar relacionadas con la reducción de los problemas que puedan presentárseles.

El proceso de implementación del método de valoración contingente implica formular una serie de preguntas hipotéticas a los encuestados, las cuales se estructuran para simular una situación en la que los participantes puedan expresar su disposición a pagar por la prevención o mitigación de la cuestión en particular. La fórmula básica para calcular la disposición a pagar es la siguiente:

$$WTP = \sum_{i=1}^n (P_i \times Q_i)$$

Donde WTP es la disposición a pagar,  $P_i$  es el precio ofrecido en el es-

cenario hipotético,  $Q_i$  es la cantidad de personas dispuestas a pagar ese precio, y  $n$  es el número total de individuos encuestados. Este enfoque permite obtener una estimación del valor monetario que la sociedad asigna a la reducción de los costos sociales derivados de la violencia, lo que resulta útil para justificar políticas públicas de prevención y protección. La información obtenida a partir de estas encuestas también se puede utilizar para realizar comparaciones entre distintas intervenciones en términos de eficiencia económica.

Varios estudios empíricos han utilizado el MVC para evaluar los costos sociales de la violencia. Un ejemplo destacado es el trabajo de Carson et al. (2003), quienes aplicaron el método para estimar la disposición a pagar por la reducción de la violencia urbana en los Estados Unidos. Los resultados indicaron que los residentes urbanos estarían dispuestos a pagar una cantidad significativa para mejorar la seguridad en sus vecindarios, lo que sugiere que la violencia tiene un alto costo social que no siempre se refleja en las estadísticas tradicionales. En América Latina, Briceño et al. (2011) utilizaron la valoración contingente para medir el valor que los habitantes de una ciudad colombiana asignaban a la disminución de la violencia armada. Los autores encontraron que, aunque los costos directos de la violencia eran elevados, la disposición a pagar de los ciudadanos era proporcionalmente baja, lo que reflejaba una falta de confianza en la efectividad de las políticas públicas actuales.

Por otro lado, el método de costos de oportunidad mide los recursos que se pierden cuando los esfuerzos se destinan a una problemática en lugar de a actividades productivas. En el contexto de la violencia, los costos de oportunidad serían los recursos humanos y financieros que se dedican a la prevención, el tratamiento de las víctimas o la seguridad pública, en lugar de ser utilizados en otras áreas productivas, como la educación o el desarrollo económico. Según Feldstein (1972), los costos de oportunidad pueden evaluarse comparando el valor de los recursos empleados en la lucha contra la violencia con el valor que estos mismos recursos podrían generar si se invirtieran en otras áreas, como infraestructura o salud. La medición de estos costos ayuda a entender no solo el impacto directo de la violencia, sino también las oportunidades perdidas en el proceso. En este sentido, Jones et al. (2016) aplicaron el análisis de costos de oportunidad

para calcular las pérdidas económicas asociadas con la violencia en México, concluyendo que una mayor asignación de recursos a la prevención de la violencia podría generar un mayor retorno económico en términos de productividad y bienestar social.

El análisis de costos y beneficios (ACB) es un enfoque ampliamente utilizado en la economía para evaluar la viabilidad de políticas públicas o proyectos de intervención, incluyendo aquellos destinados a abordar fenómenos sociales. Este método busca comparar los costos totales asociados a un problema con los beneficios que se obtendrán de su resolución, con el objetivo de determinar si los beneficios superan los costos y, por lo tanto, si la intervención es económicamente justificable. Según Boardman et al. (2018), el ACB se basa en la premisa de que los recursos son limitados, por lo que es esencial asignarlos de manera eficiente. En el caso de la violencia, el ACB ayuda a cuantificar los efectos tanto directos como indirectos de la violencia y las intervenciones para reducirla, con el fin de tomar decisiones informadas sobre la asignación de recursos para políticas preventivas y correctivas.

El ACB utiliza una fórmula simple para comparar los costos y beneficios de una intervención. Los costos totales se representan como la suma de los gastos asociados a la implementación del proyecto, mientras que los beneficios se calculan como la mejora en el bienestar social, en el caso de la violencia, incluiría no sólo la reducción, sino también otros efectos secundarios positivos, como el aumento en la calidad de vida y la productividad. La fórmula básica del análisis de costos y beneficios es la siguiente:

$$ACB=B/C$$

Donde B representa los beneficios esperados y C los costos totales de la intervención. Si el valor de ACB es mayor que 1, se considera que los beneficios superan los costos, lo que indica que la intervención es económicamente viable. En el contexto de la violencia, los costos incluyen gastos en seguridad, atención a las víctimas, y la pérdida de productividad, mientras que los beneficios incluyen la reducción de estos gastos y el aumento en el bienestar de la población. Esta comparación permite a los responsables de la formulación de políticas públicas tomar decisiones informadas sobre la

implementación de medidas preventivas o correctivas frente a la violencia.

Numerosos estudios empíricos han aplicado el ACB para evaluar los costos y beneficios de la intervención en violencia. Un estudio clave realizado por Cohen (2000) en los Estados Unidos analizó los costos y beneficios de la reducción de la criminalidad, concluyendo que la implementación de políticas de seguridad pública podría generar un retorno positivo en términos de ahorro de costos asociados con delitos cometidos, atención a las víctimas y la sobrecarga del sistema judicial. Cohen estimó que cada dólar invertido en la reducción de la criminalidad podría generar entre 2 y 5 dólares en beneficios económicos, reflejando la alta rentabilidad de las inversiones en seguridad. En un contexto latinoamericano, Bourguignon et al. (2003) llevaron a cabo un análisis similar en Colombia, evaluando los costos y beneficios de la lucha contra la violencia armada. Los autores encontraron que las políticas de desarme y la mejora de la seguridad pública tuvieron un retorno positivo, aunque con un grado de variabilidad dependiendo de la región y la implementación específica de las políticas.

A pesar de sus fortalezas, el análisis de costos y beneficios enfrenta algunas limitaciones, especialmente cuando se trata de fenómenos sociales complejos como la violencia. Según Arrow et al. (1996), uno de los principales desafíos del ACB es la dificultad de asignar un valor monetario a los beneficios intangibles de la intervención, como la mejora en la calidad de vida o la reducción de la ansiedad y el miedo en la población. Además, el ACB no siempre captura adecuadamente los efectos a largo plazo de las políticas públicas, lo que puede llevar a subestimar los beneficios de las intervenciones preventivas. Sin embargo, cuando se complementa con métodos como la valoración contingente o el análisis de costos evitados, el ACB puede proporcionar una herramienta poderosa para la toma de decisiones, ayudando a maximizar el impacto de las políticas públicas en la reducción en este caso de la violencia y de otros problemas sociales.

El Análisis de Costo-Efectividad (ACE) es una herramienta fundamental para evaluar intervenciones en el ámbito de la salud pública y las políticas sociales, especialmente cuando el objetivo es maximizar los resultados con recursos limitados. A diferencia del análisis de costos y beneficios, que compara los costos con los beneficios monetarios, el ACE se centra en la eficiencia de las intervenciones al medir los resultados obtenidos en térmi-

nos de una variable específica, como la reducción de la violencia, por cada unidad de recurso invertido. Drummond et al. (2015) afirman que el ACE es particularmente útil en situaciones donde los beneficios son difíciles de cuantificar monetariamente, pero los resultados pueden ser medidos de manera tangible, como en la disminución de los índices de criminalidad o la mejora en la seguridad comunitaria. En este sentido, el ACE ayuda a seleccionar la opción más eficiente entre diferentes alternativas de intervención al considerar no solo los costos directos, sino también los costos indirectos asociados a la violencia, como la pérdida de productividad y los efectos sobre los servicios públicos.

La metodología del ACE se puede representar mediante la siguiente fórmula:

$$CE = C_{\text{total}} / E_{\text{resultado}}$$

Donde CE es el costo por unidad de efectividad,  $C_{\text{total}}$  son los costos totales de la intervención (incluyendo tanto los costos directos como los indirectos), y  $E_{\text{resultado}}$  es el resultado obtenido, con respecto al tema de violencia puede estar en unidades como vidas salvadas, casos de violencia prevenidos, o mejoras en la calidad de vida. Este análisis permite comparar intervenciones en términos de costo por resultado alcanzado, ayudando a identificar las opciones más eficientes en la lucha contra la violencia. Si se desea comparar varias intervenciones, el ACE facilita la toma de decisiones al seleccionar aquella que logre los mejores resultados a un costo relativamente más bajo.

Un estudio emblemático de Stone et al. (2008) utilizó el análisis de costo-efectividad para evaluar distintas políticas públicas para reducir la violencia doméstica en el Reino Unido. Los autores concluyeron que las intervenciones basadas en la educación y la sensibilización comunitaria, aunque de bajo costo, fueron significativamente más efectivas que las estrategias de intervención directa a través del sistema judicial, cuando se medían en términos de reducción de incidentes de violencia y mejora en la calidad de vida de las víctimas. De manera similar, Agha et al. (2014) utilizaron el ACE para evaluar programas de prevención de la violencia juvenil en países de América Latina. Su análisis mostró que las iniciativas

comunitarias, a pesar de ser menos costosas, ofrecían una mayor efectividad en la reducción de la violencia juvenil, destacando la importancia de orientar los recursos hacia programas con alto retorno en términos de resultados sociales.

Además de los costos directos, el análisis de costos en el contexto de la violencia también debe considerar los costos indirectos, como la pérdida de productividad laboral y el impacto sobre los servicios públicos, que pueden tener efectos a largo plazo sobre la economía. Estos costos indirectos representan efectos colaterales que, aunque a menudo invisibles en los análisis tradicionales, pueden ser determinantes en la evaluación global de la eficiencia de una intervención. Miller (2012), en su análisis de los costos económicos de la violencia en los Estados Unidos, encontró que los costos indirectos relacionados con la pérdida de productividad laboral debido a la violencia doméstica y juvenil representaban una parte significativa de los costos totales de la violencia, estimando que la pérdida anual de productividad supera los 50 mil millones de dólares. Este tipo de costos puede incluir desde el ausentismo laboral de las víctimas hasta la sobrecarga en los servicios de salud y seguridad pública, los cuales deben ser tomados en cuenta en cualquier análisis de costo-efectividad para una valoración completa de los impactos económicos de la violencia.

El estudio del impacto social es una metodología que busca evaluar los efectos más amplios de la violencia sobre la cohesión social, la calidad de vida y el bienestar general de la comunidad. A diferencia de otros enfoques que se enfocan principalmente en los costos directos e inmediatos de la violencia, como los gastos en atención médica o los costos judiciales, el impacto social aborda cómo la violencia afecta las relaciones sociales y la estructura comunitaria a largo plazo. Según Guerra et al. (2005), la violencia no sólo desestabiliza a las víctimas directas, sino que también tiene efectos colaterales profundos sobre la comunidad en su conjunto, al fomentar desconfianza social, aumentar la inseguridad y deteriorar las redes de apoyo social. Este enfoque es crucial para entender el impacto holístico de la violencia, ya que los efectos negativos sobre la cohesión social y la calidad de vida no siempre se reflejan en términos económicos inmediatos, pero pueden generar un impacto negativo persistente sobre el desarrollo social y económico de una región.

La medición del impacto social de la violencia generalmente involucra el análisis de indicadores cualitativos y cuantitativos, que permiten capturar aspectos intangibles como la desconfianza, el miedo generalizado y la erosión de las relaciones comunitarias. Una de las fórmulas comunes utilizadas en este tipo de análisis es la medición del Índice de Impacto Social (IIS), que combina diversas variables relacionadas con la cohesión social, la percepción de seguridad y la participación en actividades comunitarias:

$$\text{IIS} = \alpha_1(\text{DS}) + \alpha_2(\text{IS}) + \alpha_3(\text{RC}) + \alpha_4(\text{PC})$$

Donde DS es el nivel de desconfianza social, IS es el índice de inseguridad percibida, RC es el deterioro de las redes de apoyo comunitario, y PC es la participación comunitaria en actividades colectivas. Los coeficientes  $\alpha_1$ ,  $\alpha_2$ ,  $\alpha_3$ ,  $\alpha_4$  reflejan la importancia relativa de cada uno de estos factores en la determinación del impacto social total. Esta fórmula permite a los investigadores integrar múltiples dimensiones del impacto social de la violencia y proporcionar un indicador que sea más representativo de los efectos a largo plazo que no siempre son visibles en los cálculos económicos directos.

En términos de estudios empíricos, Figueroa (2011) aplicó este enfoque en diversas comunidades urbanas de América Latina, analizando el impacto social de la violencia en la cohesión social. Los resultados mostraron que las altas tasas de criminalidad y violencia disminuían significativamente la confianza en las instituciones y en otros miembros de la comunidad, lo que a su vez reducía la cooperación social y la participación en actividades comunitarias. Además, el estudio reveló que las comunidades con altos índices de violencia mostraban una mayor tendencia al aislamiento social, lo que dificulta la implementación de políticas públicas de integración y cohesión social. En un contexto similar, Sampson et al. (1997) estudiaron el impacto de la violencia urbana en las redes de apoyo comunitarias en Chicago, encontrando que las altas tasas de criminalidad estaban estrechamente relacionadas con la desintegración de la comunidad y la disminución de la participación en actividades colectivas, lo que exacerbar aún más los efectos de la violencia.

Además, el estudio del impacto social ayuda a comprender cómo la violencia afecta la calidad de vida de los ciudadanos en formas que van

más allá de los daños físicos o económicos directos. Según Kawachi et al. (1999), la violencia incrementa el estrés social, reduce la satisfacción con la vida y deteriora la salud mental de los habitantes de las comunidades afectadas, generando un círculo vicioso en el que la inseguridad fomenta más violencia. Estos efectos, aunque difíciles de medir de manera precisa, tienen implicaciones de largo alcance sobre el bienestar general de la población. La evidencia de estudios como el de Sampson et al. (1997) y Figueroa (2011) demuestra que la violencia no solo altera las dinámicas económicas, sino que también tiene un impacto profundo sobre el tejido social y la cohesión comunitaria, afectando la capacidad de las personas para interactuar, confiar y trabajar juntas hacia objetivos comunes. Este tipo de análisis contribuye a una comprensión más integral de los costos sociales de la violencia, permitiendo que las políticas públicas no solo se enfoquen en la reducción de la criminalidad, sino también en la restauración de la confianza y la cooperación social a largo plazo.

### **Conclusiones**

En conclusión, el estudio de los costos sociales asociados a la violencia contra niñas, niños y adolescentes requiere un enfoque integral que vaya más allá de los efectos inmediatos visibles. Como lo señaló Pigou (1920), los costos sociales incluyen no solo los costos privados, sino también los impactos externos que una actividad genera en la comunidad. En el caso de la violencia, estos costos externos afectan a toda la sociedad, ya que los efectos no se limitan a las víctimas directas, sino que también alteran la cohesión social, el bienestar colectivo y el desarrollo de las futuras generaciones. Los costos sociales de la violencia, tales como la desconfianza social y el deterioro de las relaciones comunitarias, son tan significativos como los costos directos, pero son mucho más difíciles de medir y, por lo tanto, tienden a ser subestimados en los análisis convencionales.

La medición de los costos sociales de la violencia infantil y adolescente debe incluir tanto los efectos directos como los indirectos, como los traumas emocionales, la interrupción de la educación y las consecuencias a largo plazo para el capital humano. Los estudios existentes han demostrado que los niños y adolescentes expuestos a violencia tienen un mayor riesgo

de experimentar problemas emocionales y académicos que repercuten en su desarrollo y productividad futura. Sin embargo, estos efectos no siempre se reflejan en las estadísticas tradicionales, lo que limita la capacidad de los responsables políticos para diseñar intervenciones efectivas.

Para medir los costos sociales de la violencia, especialmente en el contexto de niñas, niños y adolescentes, las metodologías más recomendadas son aquellas que combinan enfoques cuantitativos y cualitativos. Los estudios de *costo-beneficio* y *costo-efectividad* proporcionan un marco para evaluar los costos directos e indirectos de la violencia, considerando no solo los gastos inmediatos en salud y seguridad, sino también los impactos a largo plazo en el bienestar emocional, educativo y social de las víctimas y las comunidades afectadas. Además, los métodos cualitativos, como las entrevistas en profundidad y los grupos focales, permiten capturar los efectos psicosociales y las externalidades más difíciles de cuantificar, como el trauma emocional y el deterioro de la cohesión social. Una metodología integral que combine ambos enfoques es fundamental para obtener una visión completa de los costos sociales, lo que permitirá diseñar políticas públicas más efectivas y orientadas a la prevención y rehabilitación de las víctimas, así como a la reducción de las externalidades generadas por la violencia.

En términos de políticas públicas, es fundamental que se reconozca la magnitud de los costos sociales de la violencia y se diseñen intervenciones que no sólo aborden los daños inmediatos, sino también los efectos a largo plazo. Las políticas deben incorporar enfoques más completos que no se limiten a los costos directos, sino que también incluyan la evaluación de las externalidades generadas en la comunidad y los efectos sobre la cohesión social. La falta de medición de estos costos ocultos perpetúa la subestimación del problema y limita la capacidad de los gobiernos para asignar recursos de manera eficiente. En este sentido, como sugiere Coase (1960), aunque las externalidades pueden ser corregidas mediante negociaciones entre las partes afectadas, la complejidad de la violencia y sus efectos dispersos hace que este tipo de intervenciones sea difícil de implementar sin un marco claro y recursos adecuados.

Por último, es imperativo adoptar una perspectiva multidisciplinaria que integre la economía, las ciencias sociales y las ciencias políticas para abordar los costos sociales de la violencia de manera efectiva. El enfoque

económico, junto con las herramientas metodológicas propuestas por la política, permite evaluar no solo los costos visibles de la violencia, sino también las externalidades que impactan la calidad de vida y el desarrollo social. La integración de estas disciplinas puede ofrecer una comprensión más completa de los efectos de la violencia, lo que resulta crucial para diseñar políticas públicas que aborden tanto los costos inmediatos como los efectos a largo plazo, promoviendo así una sociedad más equitativa, resiliente y capaz de romper los ciclos de violencia que afectan a las generaciones más vulnerables.

### Referencias

- ACNUR México. (2023). Boletín sobre Desplazamiento Interno en México - Primer Semestre de 2023. Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), México.
- Agha, S., D'Elia, C., y Flores, A. (2014). Cost-effectiveness of youth violence prevention programs in Latin America. *International Journal of Public Health*, 59(2), 243-250.
- Arias, E. D., y Goldstein, D. M. (2010). *Violent Democracies in Latin America*. Durham, NC: Duke University Press.
- Arrow, K. J., Solow, R. M., Portney, P. R., Leamer, E. E., Radner, R., & Schuman, H. (1996). Report of the NOAA Panel on Contingent Valuation. *Federal Register*, 58(10), 4601-4614.
- Auyero, J., y Mahler, M. (2011). Violence and the State at the Urban Margins. *Journal of Contemporary Ethnography*, 40(4), 401-429.
- Banco Mundial. (2011). *World Development Report 2011: Conflict, Security, and Development*. Washington, DC: World Bank.
- Banco Mundial. (2018). *Violencia y desarrollo: un enfoque integral para abordar la violencia en las comunidades*. <https://www.bancomundial.org/es/news/feature/2018/11/12/violencia-y-desarrollo>
- Bateson, R. (2012). Crime Victimization and Political Participation. *American Political Science Review*, 106(3), 570-587.
- Boardman, A. E., Greenberg, D. H., Vining, A. R., y Weimer, D. L. (2018). *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice* (4th ed.). Pearson Education.

- Bourguignon, F., Ferreira, F. H. G., y Menendez, M. (2003). Inequality of Opportunity in Brazil. *Review of Income and Wealth*, 49(4), 475-499.
- Briceño, M., Paredes, L., y Gómez, A. (2011). La valoración contingente de la violencia urbana: Un estudio en Colombia. *Revista de Economía del Caribe*, 14(2), 45-63.
- Carson, R. T., Flores, N. E., y Meade, N. F. (2003). Contingent valuation: Controversies and evidence. *Environmental and Resource Economics*, 24(3), 173-189.
- Cervantes A. R., y Téllez G.G. L. (2020). Efectos Psicosociales del Desplazamiento Forzado Interno en México. En *Revista Mexicana de Estudios sobre el Desplazamiento Forzado*, 6(2), 75-85.
- Chalfin, A., Heller, D., y Sivaraman, V. (2019). Estimating the Economic Impact of Violence on Society: The Limitations of the Avoided Costs Approach. *Economics & Policy*, 46(3), 212-229.
- Coase, R. H. (1960). "The Problem of Social Cost." *Journal of Law and Economics*, 3, 1-44.
- Cohen, M. A. (2000). The Costs of Crime and the Benefits of Criminal Justice Intervention. In *Crime and Justice: A Review of Research* (Vol. 27, pp. 29-74). University of Chicago Press.
- Cohen, M. A. (2000). *The Costs of Crime: A Survey of the Literature*. Washington, DC: National Institute of Justice.
- Dasgupta, P. (2001). *Human Well-Being and the Natural Environment*. Oxford University Press.
- Drummond, M., Sculpher, M., Claxton, K., Stoddart, G., & Torrance, G. (2015). *Methods for the Economic Evaluation of Health Care Programmes* (4th ed.). Oxford University Press.
- Dube, O. P., y Vargas, J. F. (2013). Determinants of Crime and Violence in Colombia: The Role of Poverty, Education, and the Labor Market. *Economía*, 14(1), 35-73.
- Dube, S. R., Anda, R. F., Felitti, V. J., Edwards, V., y Croft, J. B. (2008). Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: Findings from the Adverse Childhood Experiences Study. *JAMA*, 286(24), 3089-3096.
- Fajnzylber, P., Lederman, D., y Loayza, N. (2002). What Causes Violent Crime?. *European Economic Review*, 46(7), 1323-1357.

- Feldstein, M. (1972). *The economics of public services: Cost-benefit analysis*. MIT Press.
- Figueroa, E. (2011). Impacto de la violencia en la cohesión social en América Latina: Un análisis comparativo. *Revista de Estudios Sociales*, 30(3), 56-70.
- Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., y Shleifer, A. (2007). Do Institutions Cause Growth?. *Journal of Economic Growth*, 12(3), 275-304.
- Guerra, N. G., Huesmann, L. R., & Tolan, P. H. (2005). The impact of violence on children and families: A social ecological perspective. In *The Handbook of Social Psychology* (pp. 1099-1123). Wiley.
- Hanemann, W. M. (1984). Welfare evaluations in contingent valuation experiments with discrete responses. *American Journal of Agricultural Economics*, 66(3), 332-341.
- Hanish, L. D., y Guerra, N. G. (2000). A longitudinal analysis of predictors of peer aggression in early childhood. *Journal of Abnormal Child Psychology*, 28(3), 267-281.
- Hawkins, J. D., Catalano, R. F., y Miller, J. Y. (2000). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105.
- Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. (2020). Estudio sobre las consecuencias psicológicas de la violencia en México. Recuperado de <https://www.gob.mx/inprfm/documentos/estudio-sobre-las-consecuencias-psicologicas-de-la-violencia>
- Instituto Nacional de Salud Pública. (2016). Impacto de la violencia en la salud pública en México. <https://www.insp.mx>
- Jones, R. S., Smith, G., & Robinson, M. (2016). The opportunity costs of violence: An economic analysis of the impact of crime in Mexico. *Journal of Development Economics*, 115, 49-63.
- Kawachi, I., Kennedy, B. P., & Wilkinson, R. G. (1999). *Income inequality and health: A reader*. The New Press.
- López, L., Pérez, D., & Rivas, A. (2015). Costos evitados de la violencia juvenil en Colombia: Un análisis de políticas públicas. *Revista de Economía y Sociedad*, 27(1), 45-58.

- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of Economics*. Cengage Learning.
- Marmot, Michael, (2004). *The Status Syndrome: How Social Standing Affects Our Health and Longevity*. Henry Holt.villa
- McCullough, Michael E., et al. (2004) *The Psychology of Gratitude*. Oxford University Press.
- Miller, T. R. (1996). The Costs of Violence: A Review of the Literature. *Journal of Trauma*, 41(1), 24-32.
- Miller, T. R. (2007). Estimating the Costs of Violent Crime. *Crime and Justice*, 36(1), 109-146.
- Miller, T. R. (2012). The economic burden of intimate partner violence in the United States. *Violence and Victims*, 27(1), 1-10.
- Miller, T. R., Cohen, M. A., y Wiersema, B. (2006). The Cost of Crime to Society: New Crime-Specific Estimates for 2001. *Crime y Delinquency*, 52(1), 86-109.
- Mora Elizondo, J., y Villalobos Barrantes, E. (2019). La violencia en contextos educativos y su impacto en la salud mental de los estudiantes. *Revista de Educación y Cultura*, 22(3), 20-34.
- Moreno, J. O., y Saucedo, E. (2020). Crime and employment destruction in Mexico: Do firms' size and location matter? *Análisis Económico*, 35(88), 9-41
- Moser, C., y McIlwaine, C. (2004). *Encounters with Violence in Latin America: Urban Poor Perceptions from Colombia and Guatemala*. London: Routledge.
- Murphy, P., Gilligan, C., y Clark, D. (2019). The Economics of Violence: Externalities and Social Costs. *Journal of Political Economy*, 127(4), 1050-1076.
- Orrego, S., Chen, Z., Krekora, U., Hou, D., Jeon, S. Y., Pittman, M., Montoya, C., Chen, Y., y Kang, S. H. (2020). Bioinspired materials with self-adaptable mechanical properties. *Advanced Materials*, 32(21),
- Organización de las Naciones Unidas. (2015). *Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. <https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/agenda2030/>
- Organización Mundial de la Salud. (2014). *Prevención de la violencia: una guía de buenas prácticas*. <https://www.who.int/publications/i/item/preventing-violence>

- Organización Mundial de la Salud. (2014a). *Violence Prevention: The Evidence*. Geneva: World Health Organization.
- Organización Mundial de la Salud. (2016b). *Global Status Report on Violence Prevention 2016*. Geneva: World Health Organization.
- Organización Mundial de la Salud. (2016). *Prevención de la violencia: una guía de buenas prácticas*. <https://www.who.int/publications/i/item/preventing-violence-a-guide-to-effective-interventions>
- Pigou, A. C. (1920). *The economics of welfare*. Macmillan.
- Rodrigo M. I., Núñez G. P., y Rodrigo M. L. (2019). La educación como herramienta de cambio social: educación en valores y violencia de género. *Inter Disciplina*, 7(17), 99–118. <https://doi.org/10.22201/cei-ich.24485705e.2019.17.67526>
- Rodríguez, R., López, M., y Pérez, T. (2019). La normalización de la violencia en la interacción educativa: efectos en la cohesión y el proceso de aprendizaje. *Educación y Desarrollo Social*, 15(2), 7-15.
- Sampson, R. J., Raudenbush, S. W., y Earls, F. (1997). Neighborhoods and violent crime: A multilevel study of collective efficacy. *Science*, 277(5328), 918-924.
- Secretaría de Salud de México. (2018). *Impacto de la violencia en la salud mental de la población mexicana*. Recuperado de <https://www.gob.mx/salud/documentos/impacto-de-la-violencia-en-la-salud-mental>
- Secretaría de Salud. (2020). *Estudio sobre el costo de la violencia en la salud en México*. <https://www.gob.mx/salud/documentos/costos-violencia>
- Stiglitz, J. E. (2000). *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton y Company.
- Stone, I., Brown, A., y Williams, K. (2008). Cost-effectiveness of interventions for reducing domestic violence: A UK analysis. *Health Economics*, 17(1), 31-45.
- UNESCO. (2019). *Tackling Violence in Schools: A Global Perspective*. UNESCO. Recuperado de [https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/tackling\\_violence\\_in\\_schools\\_spanish.pdf](https://violenceagainstchildren.un.org/sites/violenceagainstchildren.un.org/files/documents/publications/tackling_violence_in_schools_spanish.pdf)
- Villarreal, A. (2007). Women's employment status, coercive control, and intimate partner violence in Mexico. *Journal of Marriage and Family*, 69(2), 418-434.